NOTIFICACION. Edictos.

Si el actor desconoce el domicilio real del demandado que es vecino de otra provincia, a fin de notificarlo de la promoción del pleito, debe justificar previamente y en forma sumaria que ha realizado todas las gestiones tendientes a conocer dicho domicilio y, sólo en caso de persistir la ignorancia, debe efectuar la notificación por edictos en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuera conocido.

Comuna de Bustinza c. Rafaeli, Luis

Rosario, 7 de diciembre de 1978. — Y Considerando: 1º) En 18-7-75, la Comuna de Bustinza demandó por la vía de apremio prevista en la ley 5066 a Luis Rafaeli, pretendiendo percibir la suma de \$ 1.091 sus recargos e intereses, por la deuda fiscal que el demandado tenía con aquélla en concepto de alumbrado, riego y desagües de la propiedad sita en San Martín y Tucumán (Manzana 47, Gráf. cod. 6) de la localidad de Bustinza.

Efectuada la primera notificación (citación de remate) en el domicilio denunciado, se diligenció por el Juez de Paz con una persona ocupante de la finca que manifestó claramente que el propietario se domicilia en la localidad de Alta Gracia (Prov. de Córdoba). Al mismo tiempo, se publican edictos por tres días en el Boletín Oficial (art. 28, ley 5066).

Sobre tal base, y ante la ausencia y silencio del excepcionante, se dictó sentencia de remate que quedó notificada en los estrados del tribunal (art. 28 ley 5066). Posteriormente se ordenó trabar embargo sobre el inmueble, al que no pudo darse curso en el Registro General por no citar el oficio respectivo "la nota de dominio del inmueble que se ha de efectuar".

Frente a tal circunstancia, pretendió la actora que el embargo ya decretado se trabara sobre los derechos y acciones de posesión que pudieran corresponder sobre el inmueble, y a base de ello se peticionó su subasta.

El juez inferior, luego de aceptar el temperamento propuesto por la actora, emitió pronunciamiento oficioso excluyendo de la ejecución los derechos y acciones embargadas, a base de lo dispuesto en C.P.G., 487.

2) Aunque esta instancia de grado superior ha sido abierta por la apelación que dedujera el actor contra el decisorio recién sentado, parece conveniente efectuar —en forma previa el estudio de los agravios vertidos— el análisis de la validez de las actuaciones cumplidas en estos autos, teniendo en miras un claro deber constitucional del juzgador: asegurar a las partes la intangibilidad del derecho de defensa para que puedan obtener, en consecuencia, un debido proceso.

Comenzando tal labor, se advierte que al momento de efectuarse la pri-

mera notificación de las pocas que se practicaron en autos, el actor tomó cabal conocimiento de que el demandado no residía en esta provincia.

A partir de allí, a fin de posibilitar su derecho de contradicción, hubo que tomar en cuenta que por ser el demandado vecino de otra provincia, no se encontraba vinculado por la ley 5066, por cuya razón tuvo que acudir el actor a la única ley procesal común para ambas partes: el C.P.C. de la Nación, cuyo art. 145 establece claramente que cuando se trata de notificar a persona cuyo domicilio se ignora, debe justificarse previamente y en forma sumaria, que se han realizado gestiones tendientes a conocer el domicilio real de la persona a quien se deba notificar y que, en caso de persistir la ignorancia, debe efectuarse la publicación por edictos en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuera conocido (idem. art. 146).

No obstante lo expuesto, se publicaron edictos por tres días en el Boletín Oficial de esta provincia, con lo cual no parece que se haya posibilitado un adecuado derecho de defensa del deudor. Ello basta, a juicio de la Sala, para declarar oficiosamente la nulidad de lo actuado a partir del decreto de fs. 6, el que habrá de notificarse nuevamente conforme a derecho.

Y a esta conclusión debe arribarse forzosamente, a poco que se advierta que a través de este proceso, el demandado puede encontrarse en trance de perder irremediamente una valiosa propiedad por una deuda fiscal de escasísima cuantía; y, por supuesto, no se trata aquí de tener una paternalista actitud judicial en defensa de los derechos del deudor, sino —simplemente— de asegurar a éste la posibilidad de audiencia que le garantiza la Constitución Nacional.

A través de lo expuesto, se advierte que resulta inoficioso el tratamiento de los agravios que expresara el actor en esta sede.

Por lo expuesto, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, **Resuelve:** Declarar nulo todo lo actuado, en estos autos, a partir de la notificación del decreto de fs. 6, el que volverá a notificarse conforme a derecho. Insértese, hágase saber y bajen. — **Alvarado Velloso.** — **Casiello.** — **Isacchi.**